

El grupo CyTA ante una nueva avanzada de oscurantismo libertario

Desde las elecciones de medio término celebradas en el mes de octubre, el gobierno nacional ha profundizado la agenda de entrega colonial, corrupción, oscurantismo, autoritarismo y degradación de los valores económicos, sociales y culturales que nuestro país supo construir a lo largo de su historia.

A las elocuentes cifras de la debacle económica e industrial, tales como la pérdida de poder adquisitivo, el ataque adrede y desde adentro a empresas del Estado, el creciente número de despidos, el cierre de PyMEs, la política exterior comercial que destruye nuestras economías regionales así como sectores estratégicos, se suman un endeudamiento cada vez más profundo, discrecional e ilegítimo. La escalada represiva contra la ciudadanía, el ataque a los organismos de derechos humanos, el voto del gobierno de Milei junto con Estados Unidos e Israel contra la eliminación de la tortura, entre otros hechos, evidencian que no hay ajuste sin represión. Las futuras reformas contra los trabajadores en general, y el anuncio de un nuevo ciclo de despidos de estatales, alertan sobre la pérdida acelerada de derechos y el debilitamiento de las instituciones públicas.

Una profunda recesión y baja del consumo popular por una marcada pérdida del poder de compra de los salarios que reprime parcialmente la inflación, el ominoso silencio de las cámaras industriales y agropecuarias, y la complicidad de los medios de comunicación, permiten que un programa económico diseñado desde EE.UU y desde las grandes corporaciones multinacionales logre mantenerse fuera del foco de la opinión pública. Un programa cuyos únicos objetivos son exportar bienes primarios y facilitar la fuga de divisas.

En paralelo, el deterioro de la Salud Pública, que fuera baluarte de nuestra sociedad, nos ha retrotraído a épocas ya superadas. Regresaron las muertes infantiles por tos convulsa, sarampión y otras enfermedades infecciosas que habían sido prácticamente erradicadas con programas de vacunación científicamente sólidos y difundidos entre nuestra población. La responsabilidad penal de quienes abandonaron dicho programa debería estar en el tope de la agenda política y social actual. El partido libertario impulsa una agenda oscurantista y anti-vacunas, tal como ha quedado patente en la lamentable exposición en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, que de la mano de legisladores oficialistas sirvió para propalar mentiras que fluctúan entre lo tragicómico y lo peligroso. Nuestra sociedad no merece semejante retroceso que se mide en vidas de inocentes.

Sobre este panorama sombrío, se destaca una avanzada de persecución política que alcanza a todos los niveles del arco disidente. Una de sus principales figuras, Cristina Fernández de Kirchner, ha sido encarcelada sin pruebas fehacientes, en el marco de un esquema de *lawfare* que será estudiado en todas las Universidades del mundo, por su grado de saña persecutoria. El gobernador de la principal Provincia del país, Axel Kicillof, es

erosionado a diario por un gobierno nacional que les niega a los bonaerenses (tal como ocurre con otras provincias) los recursos que en justo derecho y por mandato constitucional les pertenecen, al tiempo que es objeto de una campaña mediática destructiva y soez. Ex funcionarios del período 2003-2015 son también víctimas de la persecución impulsada por los dueños del país, que no les perdonan haber planificado un país soberano e independiente. Mientras tanto genocidas condenados por delitos de lesa humanidad disfrutan prisiones domiciliarias sin mayores controles ni límites en sus visitas, al tanto que avanza el negacionismo.

El esquema de hostigamiento se advierte también en ámbitos como las universidades. Se censura a profesores por el mero hecho de enseñar a su alumnado el índice de abuelidad, confundiendo un método de la genética y la estadística que ha servido y sirve en casos concretos de restitución identitaria en todo el mundo y en diversos contextos forenses, con aleccionamiento ideológico. Fue notorio también el caso de trabajadores del CONICET, que sufrieron el inicio de un sumario, perentoriamente denunciado por sindicatos, periodistas y trabajadores autoconvocados, por el simple hecho de protestar y exigir ante la máxima autoridad del organismo, el Dr. Daniel Salamone. Se suma la instigación del gobierno a “delatar” el adoctrinamiento político en las universidades que no hace más que reeditar prácticas de la dictadura militar y rechazar el carácter autónomo y democrático de las instituciones. Otros casos de hostigamiento y persecución también se han documentado, a pesar de no haber tenido impacto mediático.

Desde el sector científico y tecnológico venimos alertando sobre el “cientificidio”, la destrucción de las capacidades de investigación, desarrollo e innovación construidas en los períodos 2003-2015 y 2019-2023. Dicho “cientificidio” se origina en las políticas alentadas desde Estados Unidos que tienen la finalidad de socavar las bases de un posible desarrollo nacional soberano; para esas políticas, un sector científico-tecnológico nacional sólido representa un estorbo. A la caída salarial del trabajador científico y tecnológico, que llega hasta el 40% en algunos casos y deja a segmentos como el de becarios o personal contratado en el límite de la pobreza, se le suma la implementación de una desarticulación institucional de importantes proporciones y el uso habitual de discursos oficiales estigmatizantes y denigratorios de la ciencia como valor cultural, social y emancipatorio, y como actividad fundamental para el desarrollo y la atención de problemas sociales.

Junto a la interrupción de Programas estratégicos para el desarrollo científico nacional tales como Construir Ciencia, Equipar Ciencia, PISAC, Pampa Azul, Raíces y PoblAr (entre otros), la cancelación de subsidios de investigación vigentes (PICTs: Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica) que representaban la principal línea de financiamiento de miles de grupos en todo el país y la supresión de nuevos llamados por parte de la Agencia I+D+I, sumada a una nueva convocatoria limitada a un subconjunto de temas de interés empresarial que ignora la diversidad de la investigación de calidad en nuestro país, constituyen el certificado de defunción de la investigación básica, pilar imprescindible de la transferencia a la sociedad.

Esta situación se da en el marco del incumplimiento de lo indicado por Leyes Nacionales aprobadas con el consenso de todos los partidos políticos como la Ley 27.614 de financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, y la Ley 27.738 que define el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, herramienta clave para definir las políticas y estrategias nacionales en la materia. El desguace del INTI, del INTA y la CNEA, así como el ataque a las universidades nacionales, junto con el no cumplimiento por el Poder Ejecutivo de la Ley de financiamiento aprobada por el Congreso de la Nación, completan un

panorama crítico. Alertamos en particular sobre el art. 30 del presupuesto 2026 presentado por el gobierno, que anularía artículos clave de leyes vigentes para el financiamiento del sector científico, tecnológico y educativo. Es importante dejar claro que el desmantelamiento del sistema científico-tecnológico es una consecuencia del modelo de país neocolonial de Milei y quienes lo acompañan: una red de complicidad que atraviesa toda la sociedad. Colaboran con ello la alienación informativa, la apatía y la funcionalidad a intereses de coyuntura.

Ante este escenario, llamamos a la acción y a la unidad de todos los sectores dispuestos a luchar para ponerle freno a este proceso de degradación de la sociedad argentina nunca antes visto, a través de la denuncia en foros nacionales e internacionales, la organización política, la amplia convergencia entre sectores y partidos políticos democráticos y grupos y movimientos sociales, la mirada nacional, popular, feminista y latinoamericanista y la elaboración de un proyecto de futuro sobre la base de un diagnóstico certero y de un programa político que atienda las angustias, necesidades y esperanzas de la sociedad argentina.

La Patria está en peligro, y es necesario apelar a la inteligencia, la imaginación política, la solidaridad social y la defensa de los valores democráticos y de los derechos de las grandes mayorías.

Grupo CyTA: Hugo Aimar, Dora Barrancos, Fernanda Beigel, Sandra Carli, Cristina Carrillo, Eduardo Dvorkin, Daniel Filmus, Ana Franchi, Andrea Gamarnik, Jorge Geffner, Rolando González-José, Marisa Herrera, Mirta Susana Iriondo, Alberto Kornblihtt, Andrés Kreiner, Carolina Mera, Adrián Paenza, José Paruelo, Juan Pablo Paz, Félix Requejo, Marcelo Ruiz, Roberto Salvarezza, Adriana Serquis, Osvaldo Uchitel, Marcos Vaira.- Diciembre 16, 2025.